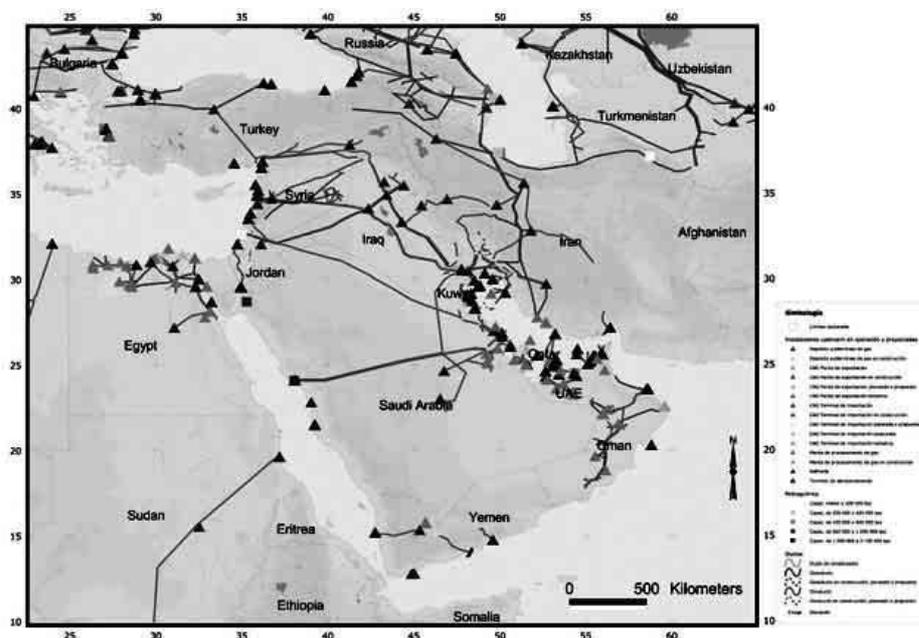


Irak: tres años bastan



estadounidense podía venir de una invasión de Kuwait o Arabia Saudí por parte de Irak. Pero la subida al poder de Jomeini cambió el foco y los equilibrios: Sadam se convirtió en un aliado incondicional de EE.UU., en los tiempos en que sí utilizaba armas de destrucción masiva contra su población, mientras estaba en guerra contra Irán. Sólo la invasión de Kuwait de 1990 cambiaría las cosas.

Coincidiendo con el tercer aniversario de la guerra de Irak, el gobierno de EE.UU. anunció una revisión de su Estrategia de Seguridad Nacional que seguía insistiendo en la doctrina de la guerra preventiva, esta vez centrado en Irán, un viejo conocido del llamado “eje del mal”. A pesar del mantenimiento de los postulados centrales de dicha Estrategia, el documento reconoce el fracaso de las inexistentes armas de destrucción masiva en Irak pero, siguiendo con la línea oficial de la Administración Bush para defenderse del desastre iraquí, lo atribuye a la deficiente información de los servicios secretos, no a la presión del Gobierno para que lograsen las cuartadas necesarias para justificar una intervención militar.

Durante los tres años que han pasado desde el principio de la invasión han salido a la luz informaciones sobre la preparación de la guerra por parte de los neoconservadores. Según George Parker, periodista de la revista *The New Yorker*, Paul Wolfowitz comenzó a darle vueltas a finales de los años setenta, antes de la revolución iraní de 1979, a la idea de que la mayor amenaza para la seguridad

oportunidad de los neoconservadores (Cheney, Rumsfeld, Bolton, Wolfowitz, Perle...) para poner en marcha su viejo plan. En septiembre de 2002, el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, pone en marcha la Oficina para Planes Especiales, creada para encontrar las pruebas que demostraran que Sadam mantenía estrechas relaciones con Al Qaeda y que Irak poseía un enorme arsenal de armas biológicas, químicas y quizás nucleares.

Pero, una vez consumada la intervención, a pesar de las pruebas “irrefutables” de los meses anteriores al conflicto, que fueron puestas a disposición de la ONU y repetidas hasta la saciedad en multitud de foros y encuentros internacionales, las armas, los laboratorios, las fábricas, los almacenes... no aparecían por ningún lado. La Casa Blanca no reconoció hasta septiembre de 2004 que sus fuerzas no habían encontrado ningún tipo de armas de destrucción masiva en Irak.

Desde hace ya tres años, el asesinato o muerte diaria de decenas de civiles en Irak se ha vuelto noticia cotidiana, mientras el país sigue sumido en una espiral interminable de terror, violencia, ruina y desintegración.

Según cifras del Departamento de Defensa de EE.UU., desde marzo de 2003 a marzo de 2006, han perecido en Irak 2.309 soldados estadounidenses, 103 británicos y 103 de otras nacionalidades. No obstante, el dato más dramático es el número de civiles muertos, que asciende a 32.396, según recuentos no oficiales, contando estrictamente a quienes han perecido como resultado de acciones de guerra o terrorismo. Si se incluye a personas muertas por causas imputables directa o indirectamente a la guerra, como hizo la revista *The Lancet*, la cifra superaría los 100.000 muertos. Si a esta cantidad se agregan los heridos, el número de víctimas podría superar las 200.000 personas. Esta enorme cifra de víctimas explicaría la ausencia de informes oficiales pues, como han denunciado varias ONG, existe un propósito deliberado en EE.UU. de ocultar su número, para no dar más argumentos a los adversarios de la guerra.

Otra cuestión relevante es identificar al responsable de tanta mortandad. La sorpresa llega a la hora de conocer la identidad de los autores, según una investigación llevada a cabo por los organismos Oxford Research Group e Irak Body Count. El informe señala que los ejércitos ocupantes son responsables del 37% del total de las víctimas, en tanto que la resistencia sería culpable del 9,5%. El segundo porcentaje mayor de muertes (35,9%) corresponde a grupos criminales sin relación con la insurgencia. Se trataría, por una parte, de los escuadrones de la muerte y, por otra, de grupos de delincuentes que actúan aprovechando el desamparo en que vive gran parte de la población iraquí.

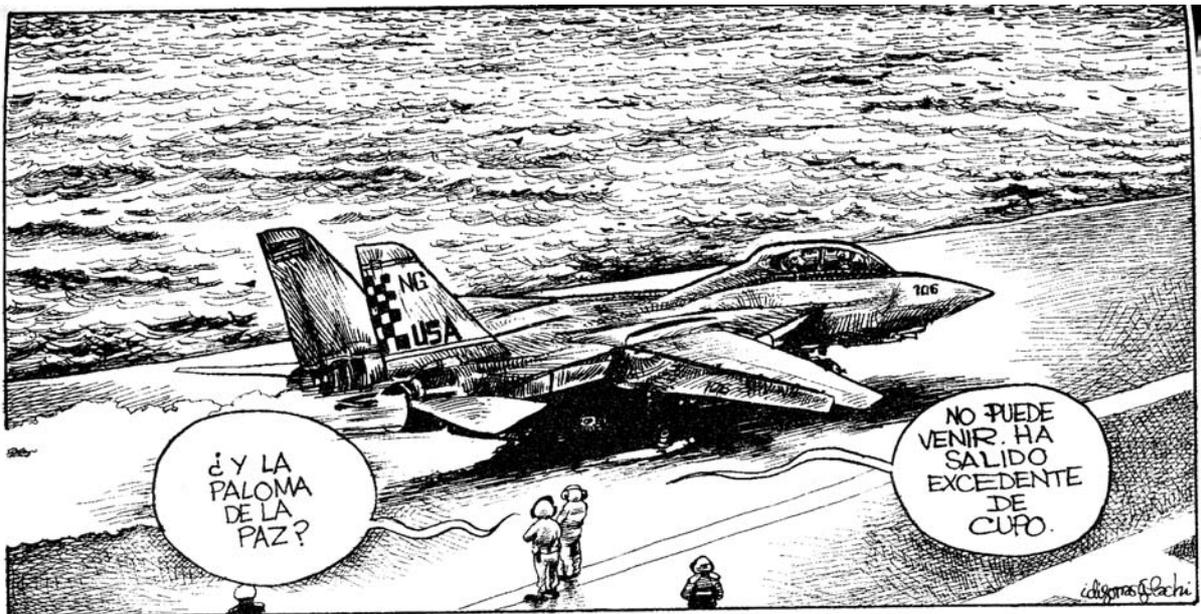
Otro dato de este informe contribuye a desvelar las responsabilidades en cuanto a las muertes de civiles. Según los resultados de la investigación, el 53% de estas muertes se habían producido como consecuencia de acciones con explosivos, de las cuales el 64% correspondía a ataques aéreos efectuados por EE.UU. Aunque lo que más se difunde son los atentados con coches-bomba, que suelen suceder en ciudades, el mayor porcentaje de víctimas por explosivos se debe a operaciones aéreas de las fuerzas ocupantes, a las que rara vez acceden las cámaras de televisión.

Cuestión aparte es el costo material de la guerra. ¿A cuánto ascienden los daños provocados por la agresión y la ocupación militar?. No es difícil imaginar que tales daños ascienden a centenares de millones de euros, sumando desde la destrucción de ciudades como Faluya hasta el saqueo de los museos de Irak, sin olvidar los contratos leoninos y los cobros ilegales. A ello hay que agregar el costo de cada vida humana que, aunque no tenga precio, sí puede ser fijado a efectos de indemnización.

En este punto resalta la valoración miserable que EE.UU. hace de la vida de los ciudadanos iraquíes. En 2001, el procónsul estadounidense en Irak Paul Bremer emitió un decreto ordenando pagar 2.500 dólares por cada iraquí muerto "por error" a manos de soldados estadounidenses. Pero EE.UU. exigió a Libia que pagara 10 millones de dólares por cada una de las víctimas del atentado de Lockerbie. El Gobierno libio debió entregar 2.700 millones de dólares. Es decir, la vida de un ciudadano de EE.UU. vale 4.000 veces más que la de un iraquí.

Tres años después de iniciada la guerra de agresión, todo está peor que antes, particularmente los Derechos Humanos. Bajo la dirección del anterior embajador de EE.UU., John Negroponte (ahora ascendido a director de la inteligencia nacional), el Ministerio del Interior iraquí se convirtió en la nueva policía secreta, encargada de organizar torturas y escuadrones de la muerte contra la resistencia iraquí. En los primeros años de la década de los 1980, como embajador estadounidense en Honduras, Negroponte fue el elemento clave a la hora de poner en marcha un estado de terror contra los pueblos de Nicaragua, El Salvador y Honduras. Escribiendo estas líneas me viene a la memoria la persona y el testimonio de Monseñor Oscar Romero y de tantos inocentes anónimos, torturados y asesinados en esa época en países de América Latina gobernados por crueles de dictaduras militares.

Las violaciones de los derechos humanos no solo han sido responsabilidad de grupos de paramilitares apoyados desde el Ministerio del Interior iraquí. Las propias fuerzas de ocupación han estado implicadas en dichas violaciones. De todos es sabido los abusos cometidos por funcionarios estadounidenses en las



instalaciones de Abu Ghaib (Bagdad), calificados como crímenes de guerra por parte de Amnistía Internacional (A.I.).

Desde hace dos años, dicha organización viene documentando abusos sistemáticos a manos de funcionarios estadounidenses contra detenidos, tanto en Irak como en Afganistán (bases aéreas estadounidenses de Bagram y Kandahar), pasando por las instalaciones de la base militar de Guantánamo. En los últimos meses han saltado a los medios de comunicación las denuncias de los llamados “vuelos de la CIA”, que transportaban a detenidos estadounidenses acusados de terrorismo hacia terceros países en donde podían ser interrogados y torturados con mayor impunidad.

A.I. denuncia como el gobierno de EE.UU. siempre ha demostrado su falta de respeto hacia los Convenios de Ginebra y los principios básicos de la ley, los derechos humanos y la dignidad humana. Esto ha creado un clima en el que los soldados estadounidenses creen que pueden deshumanizar y degradar a los prisioneros impunemente. La organización manifiesta que lo que ahora vemos que sucede en Irak es consecuencia lógica de la aplicación implacable de la “guerra contra el terror” independientemente del coste que

puede suponer para los derechos humanos y sin tener en cuenta las leyes de la guerra.

La riqueza económica más importante de Irak, aquella que podía haber logrado el bienestar material de sus habitantes, se ha convertido en la razón de su actual pesadilla: el petróleo. A estas alturas pocas personas son las que dudan de que el acceso al petróleo iraquí y el control geoestratégico de la región del Golfo Pérsico ha sido el principal objetivo de la invasión estadounidense de Irak.

Cuando en septiembre de 2002 se le preguntó a Larry Lindsay, asesor económico de la Casa Blanca, si EE.UU. podría permitirse una operación militar costosa en Irak, contestó afirmativamente. Agregó que, después de un cambio de régimen en Irak, se podría incrementar el suministro de petróleo mundial de 3 a 5 millones de barriles día y que el petróleo iraquí les reportaría alrededor de 50 mil millones de dólares en los años siguientes. Lindsay manifestó que Irak podría fácilmente pagar los trabajos de reconstrucción.

Irak posee la segunda reserva mayor de petróleo del mundo, pero al día de hoy los iraquíes se ven obligados a hacer colas tremendas para conseguir una mínima cantidad de petróleo. Las exportaciones de crudo iraquí están alcanzando los niveles más bajos

de los últimos años. Una mala gestión del trabajo de reconstrucción, una extensa corrupción entre los miembros del gobierno y el sabotaje de la resistencia hacia gaseoductos e instalaciones, son las razones que explican esta caída.

Tres años después de la invasión la industria del petróleo está todavía desorganizada. No se sabe con seguridad la cantidad de petróleo que se está exportando, ni los precios exactos a los que lo están vendiendo y, lo que es peor, no se sabe bien a dónde van a parar los beneficios del petróleo.

El gobierno iraquí establece pérdidas en ocho millones de dólares al año correspondientes a las ganancias potenciales no obtenidas de petróleo debido al mal estado actual de la industria energética. Antes de la guerra la producción de crudo se estimaba en unos 3 millones de barriles al día, frente a los 1,3 millones de producción actual. Tenemos que tener en cuenta que a los tres años de guerra debemos sumar los trece años de sanciones de Naciones Unidas, tras la Guerra del Golfo de 1990. Esta situación explica el lamentable estado actual de la industria petrolera iraquí y todos los indicadores señalan que la dificultad de la producción continuará debido a la escalada de la violencia.

A las desastrosas condiciones sociales que sufre el pueblo iraquí después de décadas de guerra y tres años de ocupación, hay que añadir las políticas que está llevando a cabo el actual Gobierno iraquí, como resultado de la reestructuración económica auspiciada por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Para obtener un préstamo del FMI de 685 millones de dólares y la cancelación de parte de la Deuda Externa iraquí (que asciende a 120.000 millones de dólares), el Gobierno ha accedido a ir eliminando los subsidios a los carburantes.

El principal impacto ha sido el aumento de la inflación, ya que la elevación del costo de los carburantes y del transporte ha repercutido en el aumento de casi la totalidad de los bienes de consumo. La tasa oficial de inflación, en enero pasado, saltó del 5,8% al 22%. Por término medio el precio de los alimentos ha aumentado un 24%.

En un país en las que casi ocho millones de personas viven con menos de un dólar por día, el aumento de la inflación no puede sino

empeorar la ya atroz tasa de desnutrición existente. Al menos una cuarta parte de niños iraquíes sufren alguno de los grados de desnutrición establecidos por la OMS.

Al mismo tiempo, millones de iraquíes están padeciendo las consecuencias de la destrucción de otros aspectos de la infraestructura social. Mientras que el país continúa en ruinas, miles de millones de dólares han fluído a las arcas de compañías estadounidenses, como Haliburton, al tiempo que otros miles de millones no se ha dado explicación sobre su paradero. La corrupción ha alcanzado niveles extremos y el gobierno es sólo una entidad parasitaria viviendo de los ingresos del petróleo. No es que una parte del gasto desaparezca en los bolsillos oficiales, es que desaparecen presupuestos enteros.

Irak ha sido arrastrado a una catástrofe humanitaria, política y militar de magnitudes colosales y todo el Próximo y Medio Oriente es una olla a presión. El riesgo es que, de mantenerse esta dinámica destructiva, el conflicto puede llegar a un punto sin retorno, desbordando las fronteras iraquíes o provocando la fragmentación del país.

El riesgo de balcanización de Irak es evidente. Desde hace ya varios meses se tiene cada vez más conciencia de que Irak se está partiendo en tres zonas diferentes. Las grietas que se abren entre suníes, chiíes y kurdos son cada vez más profundas.

La población iraquí considera que la confrontación entre chiíes y suníes es ya inevitable, sobre todo tras los atentados de Samarra y Ciudad Sadr. En el primero, ocurrido el pasado 22 de febrero, la mezquita de Al Askariya, lugar sagrado para los chiíes, fue destruida por la explosión simultánea de varias cargas explosivas. En los días posteriores, en Bagdad y en sus alrededores se encontraron unos 1.300 cuerpos de suníes mayoritariamente. En el segundo, seis coches bomba detonaron simultáneamente en el barrio chií de Ciudad Sadr, reducto del líder radical Muqtada al Sadr, matando a casi 60 personas. Varios días después la policía encontró una fosa con los cuerpos de 27 hombres en su interior, probablemente todos ellos suníes. Las milicias chiíes y los escuadrones de la muerte están masacrando a suníes cada vez que un chií muere. El Ministerio del Interior,

bajo control chií, posee comandos de policía que adoptan estrategias de actuación similares a los escuadrones de la muerte.

Desde la ocupación en 2003 las diferencias entre ambas comunidades se han agrandado, después de que los suníes (que controlaban el poder) se rebelaran contra la ocupación y no hiciera lo mismo la comunidad chií. Estos últimos suponen el 60% de la población iraquí (los chiíes son entre 15 o 16 millones, frente a los 5 millones de población suní) y no están dispuestos a ceder en su pugna por el poder tras siglos de marginación.

Por otro lado, las diferencias entre los hasta ahora aliados kurdos y chiíes están cada vez más a flor de piel. El gobierno actual se basa en una alianza kurdo-chií. La comunidad kurda se molestó cuando vieron que el presidente del Gobierno, el chií Ibrahim al-Yaafari, viajó a Turquía hace unos meses para (sospechaban) reclutar apoyos turcos en un intento de impedir a los kurdos el avance en su ya casi independencia dentro de Irak. Lo que está en juego en estos momentos, por parte de las autoridades kurdas, es lograr el control permanente de la importante provincia petrolera de Kirkuk, de la que se apropiaron al comienzo de la guerra.

Kirkuk alberga en su subsuelo reservas de alrededor de diez mil millones de barriles de petróleo y se asienta en una llanura a unos 240 kilómetros al norte de Bagdad. Según la nueva constitución, el destino de Kirkuk se decidirá el 31 de diciembre de 2007. Si la provincia se une a la región kurda, estos tendrán todos los derechos para llevar a cabo nuevas prospecciones petrolíferas. Dado que la necesidad de compartir el petróleo es casi lo único que mantiene unido a Irak, la secesión de Kirkuk, si se llega a fusionar con los territorios controlados por el Gobierno Regional Kurdo, podría ser el momento decisivo en la disolución del país.

Por todo Irak, las lealtades basadas en la pertenencia a una comunidad por parte de los miembros de las unidades del ejército y de la policía están minando el poder del estado. Hay una escalada de guerra étnica y sectaria, la gente no quiere más que milicianos de su propia comunidad defendiendo sus calles,

independientemente de que pertenezcan o no, en teoría, al ejército o la policía.

Si no se produce un giro en los actuales acontecimientos, lo más probable es que haya una nueva guerra en Irak, esta vez entre las diferentes comunidades. Seguramente el ejército se divida desde los primeros momentos y los soldados obedecerán cualquier orden que reciban de sus propias comunidades. Las zonas del país que tienen una población homogénea, ya sea chií, suní o kurda, permanecerán más tranquilas. El epicentro del desastre tendría lugar esencialmente en Bagdad entre árabes suníes y chiíes. Los chiíes tienen ventaja porque son mayoría en la capital, pero los suníes podrían resistir en sus zonas del oeste y sur de la ciudad. El trágico escenario se asemeja cada vez más al Beirut de hace treinta años.

Mientras tanto, el propósito real del Gobierno estadounidense es seguir permaneciendo en el país por tiempo indefinido, para lo cual ha construido 14 enormes bases militares. El interés de EE.UU. va más allá del control sobre el espacio iraquí, sino que sus intereses pasan por consolidar su hegemonía sobre la estratégica región de Oriente Próximo. Esta pretensión lo convierte en el obstáculo mayor de cualquier proyecto de paz.

Dada la situación actual, son cada vez más las voces que desde diferentes ámbitos reclaman un papel activo de la ONU en la región y la creación de una fuerza multinacional árabe que sustituya a las fuerzas ocupantes, hasta que el país haya podido reorganizarse. En ese contexto es cuando se podría abrir un diálogo con las fuerzas de la resistencia y los partidos suníes. El proceso debería desembocar en la constitución de un Gobierno nacional que, con el apoyo de las Naciones Unidas y los países musulmanes, acometa la tarea de reconstruir el país, sin la tutela exterior ni con tropas extranjeras que condicione sus decisiones.

No entenderlo así es condenar a Irak a una destrucción mayor y a la región a una espiral interminable de inestabilidad, sufrimiento humano y guerra. Tres años bastan. Millones de personas inocentes no deben de seguir soportando más las terribles consecuencias de una guerra injusta.

JUAN VELÁZQUEZ.